

REALIDAD SOCIAL DOMINICANA

JOSE DEL CASTILLO

Me corresponde en esta jornada auspiciada por ANJE, examinar algunos de los problemas más acuciantes de la realidad social dominicana. Un criterio selectivo - probablemente arbitrario - me obliga a dejar de lado ciertos tópicos que seguramente surgirán en los comentarios de mis colegas del panel y en las propias intervenciones de los demás participantes de este seminario.

POBLACION

A la muerte de Trujillo, la sociedad dominicana se hallaba caracterizada por la existencia de una población rural predominante, que constituía el 70% de sus habitantes, al grado que las elecciones de 1962, que le dieron la victoria al profesor Juan Bosch y más adelante, las de 1966, que ungieron al doctor Balaguer como presidente constitucional, fueron decididas por los campesinos.

A lo largo de estas dos últimas décadas, la sociedad dominicana ha experimentado uno de los procesos de urbanización más rápidos del mundo, al punto que el último Censo nacional de población arrojó un balance ligeramente favorable a las ciudades, en la composición rural-urbana de la población.

Este acelerado ritmo de urbanización ha tendido a concentrarse en la ciudad de Santo Domingo - y en menor proporción en Santiago, como centro

Ponencia presentada en el Seminario '82 "Opciones de Política Económica", celebrado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), en el Hotel Santo Domingo Sheraton, los días 23 y 24 de julio de 1982.

secundario -, configurándose un modelo típico de lo que los especialistas denominan macrocefalia urbana. De una ciudad de 369 mil habitantes, la capital ha pasado a tener una población de 1 millón 300 mil, entre 1960 y 1981, creciendo a una tasa promedio anual de un 12%.

Con el 26% de la población total del país - y el 30% si se le agregan las demás comunidades del Distrito Nacional -, el crecimiento de Santo Domingo se debe en alto grado al flujo migratorio desde las zonas rurales y desde las demás ciudades.

Ya en 1970, el Censo arrojaba un 48% de inmigrantes entre los residentes en el Distrito Nacional. Más recientemente, diferentes encuestas han detectado una tasa más elevada de inmigrantes entre los moradores de la ciudad de Santo Domingo, como la de Alcántara (1972), que reveló que el 91% de los barrios marginales estaba integrado por jefes de familia inmigrantes, que un 71% lo era en los barrios de clase media y de obreros y un 67% en los barrios de clase alta.

El fenómeno descrito para Santo Domingo, tiene su réplica en Santiago y se empieza a reproducir en otros centros urbanos del país, como San Cristóbal, que tuvo un crecimiento de un 122% de su población urbana entre los dos últimos censos, en La Vega y otros centros similares, aunque guardando las diferencias de magnitud.

Este fenómeno migratorio se ha manifestado en un agravamiento del déficit de viviendas, conjugado con una elevada tasa de desempleo, con carencia crónica de servicios de salud, educación, agua potable, electricidad, transporte, para sólo citar los capítulos más perentorios.

El campo ha estado expulsando constantemente fuerza de trabajo. La concentración latifundaria y la multiplicación de la fragmentación de minifundios improductivos son elementos claves para entender este proceso. Al mismo tiempo, la modernización de algunas actividades agropecuarias ha incrementado la productividad del trabajo, reduciendo las necesidades de mano de obra, como acontece en los casos de los cultivos del arroz y del maíz. De continuar esta tendencia, el flujo de minifundistas y obreros agrícolas expulsados por la estructura rural será cada vez mayor.

A estos factores hay que añadir la penetración de los valores y mercancías urbanas, la ampliación de las redes de transporte y de los medios de comunicación masiva, que van exponiendo con mayor fuerza al campesino a las influencias del medio urbano, subyugándolo paulatinamente y atrayéndolo hacia la ciudad, que se le muestra como un nuevo marco de posibilidades.

Los sectores medios rurales constituyen también una fuente de migración. Los hijos emigran primero, para completar los estudios universitarios, tras los hijos se establece la madre y finalmente, el jefe de familia termina trasladándose hacia la ciudad.

De igual modo, los sectores medios de centros urbanos más pequeños, suelen seguir ese patrón de comportamiento migratorio. Así mismo, los profesionales de provincia, medianos y hasta grandes empresarios, que buscan

en la gran ciudad una base más sólida para afianzar o expandir sus operaciones.

Antes que lamentarnos, debemos entender que el patrón de la vida moderna es la tendencia a residir en las zonas urbanas y que el campo mismo se urbanice, conformándose redes o tejidos urbanos que envuelven cada vez más a la mayoría de la población. Las respuestas a los problemas que este fenómeno genera no son fáciles, pero lo cierto es que las visiones idílicas, de un campesino atado casi religiosamente a la tierra, van cediendo a la realidad de que el campesino está aquí, emplazado en la periferia y en el mismo corazón de la ciudad.

EDUCACION

El sistema educativo le ha ido cambiando el rostro a nuestra sociedad convirtiéndose, a su vez, en el canal de movilidad por excelencia durante los últimos veinte años. permitiendo así que personas de origen modesto escalen posiciones sociales más relevantes que las ocupadas por sus padres.

La matrícula primaria, entre 1961-62 y 1978-79, ha experimentado un incremento de un 102%, al aumentar de unos 500 mil estudiantes a poco más de un millón. La matrícula de la enseñanza media ha tenido una expansión relativa mucho mayor aún, al crecer en un 388%, entre 1964-65 y 1977-78, pasando de 51 mil estudiantes a 250 mil. La amplia cobertura lograda por el sistema educativo puede ser estimada mejor si tomamos en cuenta que en 1975-76 el 91% de la población dominicana en edad escolar (7-14 años) se hallaba matriculada en la enseñanza primaria e intermedia. De igual modo, la calificación formal de los maestros ha sido mejorada, al punto que, en 1969-70, sólo el 19% de éstos se hallaba titulado y seis años más tarde lo estaría el 40%.

Una visión más detallada del sistema educativo, en lo referente a la enseñanza primaria, nos muestra la existencia de ciertos desbalances entre la enseñanza pública y la privada, por un lado, y la enseñanza rural y urbana, por el otro, en lo concerniente a la dotación de recursos. Mientras la enseñanza pública concentra el 87% de la matrícula primaria, sólo cuenta con el 74% de los profesores. En cambio, la enseñanza privada exhibe sus mejores condiciones de operación, si nos detenemos en el hecho de que contando con sólo el 13% de la matrícula, concentra el 26% del profesorado, representando este recurso el doble de su participación relativa en el sistema. De igual modo, estos contrastes pueden observarse en el número de aulas disponibles, que indican una mayor holgura en la realización de las prácticas docentes, pues mientras los planteles públicos representan el 89% en número y tienen el 77% de las aulas, los planteles privados, que son el 11%, tienen el 23% de las aulas.

El desbalance rural-urbano es igualmente elocuente. Teniendo la zona rural el 58% de la matrícula, para el año 74-75, apenas contaba con el 46% de los profesores.

Pese a los avances notables en materia de educación, especialmente en lo referente a la población en edad escolar que se ha podido beneficiar de la expansión del aparato educativo, con el amplio programa de construcción de edificios escolares llevado a cabo por la administración de Balaguer y por la significativa dotación de recursos presupuestarios otorgada por la administración Guzmán a la SEEBAC, todavía persisten en el país fuertes tasas de analfabetismo, particularmente entre la población adulta.

Lo anterior nos remite a la necesidad impostergable que tiene el país de reducir rápidamente los índices de analfabetismo, básicamente entre una población que se encuentra formando parte de la fuerza de trabajo. Secretaría de Educación, Universidades, Iglesias, Fuerzas Armadas, empresarios y sindicatos, junto a las organizaciones rurales podrían emprender un vasto plan de alfabetización a escala nacional.

Mientras el país cargue con un 32% de analfabetos, o sea, con más de un millón y medio de iletrados, es muy poco lo que podemos esperar de la "otra parte" de la sociedad que regularmente se quiere redimir de sus precarias condiciones de existencia.

En otro orden, conviene consignar que la enseñanza primaria y secundaria requieren de una reorientación que las haga más funcionales y acordes con las demandas de calificación efectiva del mercado de trabajo dominicano. Hasta el momento, el bachiller dominicano sólo se halla calificado para iniciar una carrera universitaria o técnica, luego de egresar de la secundaria. De esta forma, el sistema educativo está presionando fuertemente sobre la educación superior, provocándose por esta vía lo que a todas luces es un verdadero *boom universitario*. Ello exige que se piense en la implementación de bachilleratos politécnicos, que califiquen ocupacionalmente al egresado y sirvan, a nivel regional, de factor de retención de la población joven, cuyo destino casi obligado es hoy la gran ciudad.

Como habíamos señalado, el rasgo más notable de la educación dominicana fuera del incremento de la matrícula primaria y secundaria ya reseñada ha sido en los últimos años la explosión de la matrícula universitaria. En 1965, ésta se reducía a la UASD, con unos 6,606 estudiantes y la UCMM, con 357. Ya en 1976-77, la matrícula universitaria alcanzaría los 58,907 estudiantes, o sea, un 740% de incremento, agregándose a los centros ya señalados, nuevas instituciones de educación superior, como la UNPHU, la UCE, el IES, INTEC, O&M y UTESA. Hoy día, sólo la UASD registra más de 61 mil estudiantes, sin contar con unos 7 mil de la UCMM, unos 11 mil de la UNPHU, unos 15 mil de la UCE, así como los matriculados en INTEC, el IES, UTESA, CETEC, la Universidad Mundial, la Universidad CIFAS, la Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS), la Universidad Nordestana y la de Azua.

De unos 1,890 egresados de las universidades, en 1971, pasamos en 1976 a 4,866 profesionales egresados, o sea, un aumento de un 157% en sólo cinco años.

El boom universitario se ha traducido en una ampliación sustancial de la oferta de carreras hasta hace poco inexistentes en nuestro sistema de educación superior. De esta manera, carreras como las ingenierías electromecánica, química, industrial y, más recientemente, la ingeniería en

minas y geología, auspiciada por la UCMH, se han añadido a las tradicionales profesiones liberales. Del mismo modo, las ciencias sociales, con las licenciaturas en economía, sociología, psicología, ciencias políticas, historia, administración y antropología, se han incorporado al elenco de opciones que ofrece la universidad dominicana.

Este crecimiento tan extraordinario al que acabamos de aludir, se ha dado de manera espontánea, sin que hasta el presente funcionen mayores regulaciones por parte del Estado, cuya Secretaría de Educación no tiene jurisdicción sobre esta instancia del sistema educativo. A pesar del aporte presupuestario que el Estado confiere a las universidades, especialmente a la UASD, su incidencia efectiva sobre su funcionamiento es nula.

La necesidad de establecer ciertas regulaciones y coordinaciones mínimas, ha llevado a una parte de las universidades del país a establecer una organización que originalmente se conoció como el CONIES, y que, dada la renuencia de la UASD a oficializar su participación, se disolvió para dar paso a la ADRU (Asociación Dominicana de Rectores de Universidades). La sola existencia de esta institución demuestra lo impostergable que resulta proceder a un grado aún mayor de coordinación y planificación de la educación universitaria.

En el sentido indicado, se impone la constitución de un Consejo Nacional de Educación Superior que integre a las autoridades del Estado y al conjunto de los centros de educación superior, a fin de compatibilizar objetivos, estipular regulaciones mínimas y adecuar cada vez más la enseñanza universitaria a determinadas prioridades de desarrollo.

Resulta una paradoja que, mientras el país emplea unos 100 mil trabajadores en su industria azucarera, en el conjunto de las universidades y de los demás centros educativos no exista un solo programa, ni a nivel de obrero calificado, ni a nivel técnico ni a escala profesional, orientado a la formación de personal especializado para las diversas ocupaciones que se desempeñan en el complejo azucarero. En la UASD funcionó, hace muchos años atrás, una licenciatura en química azucarera, pero fue clausurada. INTEC realizó un curso ocasional de reciclaje para personal del CEA y la UCE, luego de un seminario que organizáramos en su sede sobre "La industria azucarera y el desarrollo dominicano", ha esbozado un plan para una Escuela que cubra tal necesidad.

En nuestras escuelas de Economía se imparte una amplia gama de cursos, desde mercados de valores hasta economía socialista. Sin embargo, siendo nosotros exportadores de azúcar, café, cacao, tabaco, oro, plata, bauxita y ferromnquel, desconozco - y ojalá que se me corrija - la existencia de cursos orientados a explicar la estructura y funcionamiento de los mercados de commodities, particularmente de aquellos en los que operamos. De esta forma, cuando se trata de cabildear cuotas o tratamientos arancelarios preferenciales en un mercado, los nombres hábiles para tales fines se reducen a unos pocos, cuando no a uno solo.

De igual modo, tenemos un personal en el servicio exterior, pero carecemos de un centro especializado que provea formación moderna en las diversas materias que concurren en el adiestramiento de un diplomático o de

un agente consular. De esta forma, nuestro servicio exterior es pobre - reservado para la premiación de favores y lealtades políticas - en vez de ser una herramienta eficaz de nuestro desarrollo y de igual manera es escasa nuestra incidencia en el staff de los organismos internacionales a los cuales nos hallamos vinculados.

La educación dominicana requiere de una orientación más pragmática, más de cara a las posibilidades y demandas reales de nuestro desarrollo. Como me decía un tío ya fallecido, cuando en mi época de lasallista lemos traba las calificaciones los viernes: "Papaché, más ciencia y menos religión".

EMPLEO

Las encuestas de empleo han revelado que el país tiene una alta tasa de desempleo en su fuerza de trabajo, estimándose - en un cotejo de las diferentes fuentes disponibles - en un 25%, cuya magnitud se agrava cuando se incorporan otros indicadores de subocupación de los trabajadores activos.

Sin embargo, una aproximación más exhaustiva al fenómeno del desempleo - como lo fuera la encuesta practicada por la misión de la OIT, en 1973 - evidencia, para el caso de la ciudad de Santo Domingo donde el desempleo registró una tasa de un 20%, que éste afecta principalmente a la población joven (un 36% entre los menores de 25 años), a las mujeres (un 30% frente a un 15% de los hombres) y a los solteros (un 26%), frente a los jefes de familia, que sólo registraron un 6% de desempleo.

Las cifras anteriores indican que los jefes de familia, compulsados a aceptar los niveles salariales y los tipos de empleo que el mercado les ofrece, se ven precisados a incorporarse de una manera más estable a la fuerza de trabajo ocupada, a diferencia de los jóvenes - muchos de ellos dependientes - que pueden esperar mejores oportunidades, y de las mujeres, que pueden beneficiarse de los patrones imperantes en nuestra cultura, que aceptan con mayor facilidad el "arrimo" de la mujer, en el seno familiar.

A su vez, las encuestas señalan que entre los desempleados predominan aquellos que carecen de una formación adecuada, disminuyendo las tasas de desocupación en proporción directa a los años de escolaridad. De igual forma, la estabilidad en el empleo, se halla afectada positivamente por el grado de educación formal alcanzado.

De conformidad con las estimaciones de los técnicos de la OIT, un 60% de la fuerza de trabajo ocupada podría ser considerada como subempleada, debido al carácter ocasional de su trabajo, a la naturaleza fluctuante de sus actividades y sus ingresos y al limitado número de horas de trabajo semanal. Aproximadamente un 10% de las personas ocupadas carecía de un trabajo fijo y se encontraban realizando un trabajo ocasional la semana en que fueron encuestadas.

En los últimos años - a pesar de la creación de 61 mil nuevas plazas en el sector público -, la situación de empleo ha tendido a agravarse, como lo revelan los diferentes indicadores disponibles, como una derivación del abandono de la política de construcciones por parte del Estado y como una consecuencia de la recesión económica que ha mermado los volúmenes de producción de diversos renglones de exportación y de productos industriales destinados al consumo doméstico. Baste señalar el cierre de las exportaciones de ferroníquel, de bauxita, en el campo minero; el cierre del ingenio Angelina y, anteriormente, la terminación anticipada de la zafra de CAEI, la caída brusca de los volúmenes de exportación de café y una reducción de un 40% de las ventas de bebidas gaseosas, para sólo mencionar algunos ejemplos.

En los últimos años, el movimiento de suspensiones de contratos de trabajo - un verdadero mecanismo de anticipo de la cesantía efectiva -, de desahucios y de despidos ha ido creciendo acumulativamente, especialmente en el sector moderno de la economía, específicamente en el sector industrial y en el de la construcción.

Los desahuciados, que fueron 2,710 en 1977, se duplicaron a 5,975 en el 78, para llegar a la cifra de 11,112 en el 79. Posteriormente, se han mantenido en niveles elevados, como lo indican los 6,751 de 1980.

Las suspensiones y las terminaciones de contratos de trabajo, durante los últimos tres años, han promediado unos 13 mil trabajadores por año. En lo que va del presente año, las suspensiones se encuentran por encima de los 6 mil trabajadores, lo cual hace un promedio de mil por mes.

Dentro del movimiento de suspensiones de contratos de trabajo, sorprende lo que está ocurriendo en las zonas francas industriales, puesto que revela elocuentemente cómo la recesión de la economía norteamericana empieza a afectarnos también en esos renglones como ropa y tabacos manufacturados, que exportamos por esa vía hacia los Estados Unidos.

Un indicador de lo anterior nos lo ofrece la zona franca de Santiago, que - de conformidad con datos disponibles - se ha visto precisada a suspender, en lo que va de año, unos 1,300 contratos de trabajo, que representarían un 21% de la fuerza de trabajo ocupada por la zona, que a su vez, a juicio del expresidente de la AIRD Regional Norte, ocupa al 30% de la fuerza laboral empleada en el sector manufacturero de la región.

Quizás un indicador interesante del fenómeno del desempleo y su magnitud, lo ofrezca el hecho de que, a principios del 80, acudieran unas 800 personas ante la empresa UNIFOT, en procura de empleo, como respuesta a una oferta de 3 plazas disponibles de \$125 en el laboratorio fotográfico de esa firma.

Las salidas al problema del desempleo - fuera de la respuesta ya dada por la administración del extinto Presidente Guzmán, bastante gravosa, de crear plazas en proporciones extraordinarias en la administración pública -, las han buscado los afectados en la emigración hacia Estados Unidos y Venezuela y en la multiplicación de nuevos servicios, como las ventas de frutas en las esquinas, el lavado de carros y una vasta gama de

oficios menores. Del mismo modo, se ha tendido cada vez más a profesionalizar ciertas formas de delitos, dando pábulo a una creciente ola de robos.

Las opciones frente al cada vez más crítico problema de empleo, aparentemente no son muchas. Las nuevas autoridades que se iniciarán en la gestión gubernamental el próximo 16 de agosto, han señalado su propósito de reactivar la industria de la construcción, tanto mediante la iniciativa del sector público en viviendas de interés social, como en presas y canales, en carreteras y caminos vecinales, así como a través del sector privado, particularmente en condominios para clase media, proyectos turísticos, etc.

Lo cierto es que el sector de la construcción es uno de los pocos caminos abiertos para absorber rápidamente desempleo y dinamizar la economía dominicana, dado el hecho de que existe financiamiento aprobado por parte de organismos como el Banco Mundial para programas de viviendas de interés social, lo mismo que negociaciones avanzadas con el BID para el programa de presas.

Otro de los campos que las nuevas autoridades han identificado como prioritario es el de la agroindustria, sobre cuya necesidad de desarrollo existe una amplia aceptación en el país y una ley que incentiva la inversión en ese campo. Sin embargo, hasta el momento, son muy contados los proyectos concretos y viables, que se han esbozado en el país, a propósito de la nueva ley. De todos modos, éste es uno de los potenciales y contados recuros que tiene el país en las actuales circunstancias internacionales.

Otra de las opciones de empleo, la ofrece la diversificación agrícola en tierras cañeras, como ya lo ha empezado a hacer la Gulf and Western y como lo ejemplifica el caso de FRUDOCA, con el cultivo de la piña en las tierras del ingenio Catarey. Los programas de diversificación agrícola en las tierras azucareras no sólo pueden constituir una fuente importante de generación de empleos productivos y de fomento de nuevos renglones de exportación, sino que podrían proveer una base alternativa a un programa de estabilización de la fuerza de trabajo agrícola azucarera, que nos permita ir prescindiendo gradualmente de la importación anual de unos 18 ó 20 mil braceros haitianos.

Siguiendo con la industria azucarera, los tan debatidos proyectos de industrialización de los subproductos y derivados de la fabricación de azúcar, podrían tener una concreción en el complejo sucroquímico de Barahona, sobre el cual se han hecho hasta seminarios.

Otro de los campos posibles de absorción de mano de obra ociosa es el de las artesanías, destinadas a suplir al sector turístico de mercancías de factura nacional y, eventualmente, a engrosar nuestras exportaciones directas.

Finalmente, la reforma agraria, entendida más como una empresa moderna que como un modelo ideal de justicia social, podría constituir una fuente de absorción de desempleo y subempleo en las zonas rurales.

Este último recurso se halla prácticamente estancado, dado el ritmo relativamente lento con que se han venido efectuando los asentamientos, desde los últimos cuatro años de la administración de Balaguer y los de la administración de Guzmán. En términos promedio, la administración de Balaguer, en sus doce años, asentó unos 2,822 parceleros por año, mientras que la del Presidente Guzmán asentó unos 2,182 por año. En sólo dos años, que constituyeron el climax de su programa agrario, o sea, en 1972 y 1973, la administración de Balaguer asentó casi 15 mil parceleros.

Las autoridades del IAD, durante la administración Guzmán, han colocado el énfasis en lo que se ha denominado programa de consolidación de los asentamientos de la reforma agraria, preexistentes a ese gobierno, en razón del estado de abandono en que se hallaba una buena parte de los asentamientos, de conformidad con dichas autoridades.

A pesar de los nuevos enfoques incorporados al manejo de la reforma agraria, con la promoción de las denominadas empresas de la reforma agraria (ECRA), como modelos de autogestión campesina, la realidad de las aspiraciones de los productores agrícolas y de sus niveles de calificación no han sido favorables a la buena marcha de dichas empresas.

Una investigación reciente sobre el asentamiento C2 del Proyecto Y-SURA (el primero establecido en 1978, con 180 beneficiarios divididos en 3 grupos de 60 miembros, asentados en 8 mil tareas, dedicadas al cultivo de tomate industrial y, en menor grado, sorgo), reveló una escasa intención de los propósitos que los asociaba en empresas de autogestión y una significativa propensión hacia la parcelación de la tierra y la ruptura de los vínculos con el grupo.

Otras investigaciones realizadas últimamente sobre el funcionamiento de diferentes proyectos del IAD, reflejan una baja escolaridad en los parceleros, lo cual limita las posibilidades de desarrollo de estos proyectos como empresas modernas.

En sentido general, las investigaciones sobre los proyectos de la reforma agraria muestran una realidad mucho más compleja de lo que generalmente se presume, al tomarse decisiones sobre los modelos de organización de los productores y determinarse sus supuestas aspiraciones, desde una óptica urbana, presidida frecuentemente por una visión romántica de la realidad campesina.

INGRESOS

Encuestas recientes de ingresos y gastos de las familias dominicanas, especialmente la encuesta nacional llevada a cabo por el Banco Central entre 1976 y 1977, revelan el carácter marcadamente asimétrico de la distribución de los ingresos en el país.

Una primera gran diferencia se manifiesta entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ya que el ingreso medio de las unidades familiares urbanas se ubica en unos 225 pesos mensuales, mientras que el de las familias rurales sólo alcanza los 125 pesos mensuales.

Un 26% de las familias dominicanas, o sea, alrededor de 1 millón 400 mil dominicanos, percibe ingresos por debajo de los 100 pesos mensuales, considerado como el límite de la pobreza por algunos autores y especialistas. Entre 100 y 200 pesos se ubica un 36% de las unidades familiares, mientras que un 16% se halla entre los 200 y los 300 pesos de ingresos mensuales. Sólo un 2.5% de las familias, percibe ingresos por encima de los 1,000 pesos mensuales.

Los dos grandes renglones de gastos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, son los alimentos, que representan un 43% y un 64%, respectivamente, y la vivienda, que significa el 28% y el 18%, respectivamente. Los otros renglones en importancia, son vestimenta, salud y educación.

La encuesta realizada por OIT en 1973, determinó que una parte apreciable de la población que se halla por debajo de los límites de la pobreza en la ciudad de Santo Domingo, recibe remesas periódicas de sus familiares en los Estados Unidos, siendo ésta, en una apreciable cuota, su única fuente de ingreso regular.

Estudios realizados recientemente, tanto en Santo Domingo, como en otras ciudades latinoamericanas, revelan que en los barrios marginales, las familias estructuran diferentes mecanismos de solidaridad, mediante los cuales se procede a efectuar una suerte de redistribución del ingreso, vía el intercambio de alimentos, préstamos irrecuperables, etc. Por otro lado, la incorporación de los niños y adolescentes al trabajo - ya como vendedores de periódicos, limpiadores de vidrios en los semáforos, limpieza de botas y dulceros -, contribuye a aliviar la situación de ingresos del hogar, particularmente en una estructura familiar cada vez más matrifocal, donde el hombre constituye un elemento transitorio y, por tanto, carente de responsabilidades de manutención fijas.

El incremento experimentado por el índice del costo de la vida, que en los últimos doce años ha llegado a un 250, tomando como año base 1969, agrava todavía más el problema de los ingresos, al mermar considerablemente la capacidad adquisitiva real del dinero. El estudio más detallado del incremento del costo de la vida, por grupos de ingresos, revela que en los grupos de ingresos más bajos el aumento del costo de la vida ha sido más significativo, actuando así el proceso inflacionario como un mecanismo regresivo en la redistribución de los ingresos.

Ello explica - al margen de las críticas fundadas o no que se le han formulado a INESPRES - el creciente papel de este organismo en la comercialización de productos básicos de la dieta dominicana y la expansión de los denominados programas de ventas populares.

SALARIOS Y SINDICATOS

Durante el primer año del gobierno del Presidente Guzmán se adoptaron medidas orientadas a mejorar los niveles salariales existentes, tanto en la administración pública como en las empresas, estableciéndose un

salario mínimo de 125 pesos mensuales y, en el caso de los empleados públicos, un incremento básico de un 10% para los trabajadores que tenían un ingreso entre el salario mínimo y los 300 pesos mensuales. El salario mínimo en las zonas rurales, fue aumentado de 2.50 diario a 3.50.

En otro orden, bajo la administración Guzmán se produjeron sucesivos aumentos de salarios del personal de determinadas dependencias públicas, como fue el caso de los maestros y del personal de la Secretaría de Salud y del IDSS. En otras dependencias del Estado, como la SEA, también se ha efectuado sucesivos incrementos salariales. A su vez, los rangos más elevados de la administración pública y de las empresas del Estado, fueron sustancialmente beneficiados de elevaciones de sueldos, muy por encima de los niveles aplicados al resto del personal gubernamental, como es el caso de los Secretarios de Estado, que recibieron un aumento de un 200%.

Mediante la revisión de las tarifas de salarios mínimos, llevada a cabo por el Comité Nacional de Salarios, se han modificado las bases de los salarios en un conjunto muy variado de sectores productivos y de servicios. Sin embargo, más que la acción del CNS, el peso de los sindicatos ha sido determinante en la concertación de numerosos pactos colectivos de condiciones de trabajo, en los cuales se han estipulado aumentos graduales de salarios y un conjunto muy diverso de mejorías en las condiciones de trabajo y en las prestaciones sociales correspondientes.

Y es que, tras la asunción del gobierno de Guzmán, se produjo un verdadero *boom sindical*, el segundo en la historia de los últimos 20 años del país, siendo el primero el que se produjo bajo el Consejo de Estado, luego de la muerte de Trujillo.

Un simple chequeo del registro sindical revela que sólo en el primer año de la administración Guzmán, se ha formado un número de sindicatos que equivale al 85% del total de sindicatos que se constituyeron durante los doce años del Presidente Balaguer.

El desarrollo de los conflictos laborales se ha canalizado bajo un clima de mayores garantías al reconocimiento de las prerrogativas de la parte representada por los sindicatos. En este sentido, la Secretaría de Trabajo ha desempeñado - a diferencia del sesgo a favor de los empresarios que caracterizó sus ejecutorías bajo la administración de Balaguer - una función más arbitral y equidistante, buscando soluciones armónicas entre los polos en conflicto.

Aunque la primera fase de esta nueva relación para muchas empresas que no habían tenido la experiencia de lidiar con un sindicato, pareció más conflictiva y desestabilizadora, la impresión que tienen algunos jóvenes empresarios y ejecutivos con los cuales he podido conversar sobre el particular, es que la nueva situación - aunque conlleva sus tensiones - ha resultado en una institucionalización y regulación más adecuada del conflicto, permitiéndole a la empresa liberarse de presiones recurrentes durante los tres años que suele durar el pacto colectivo. De esta forma, la empresa cuenta con un recurso para planificar sus operaciones a mediano plazo y congela ciertos factores por el tiempo de duración del pacto, al tiempo de que dispone de un instrumento que obliga de manera recíproca, a las partes, a cumplir con las reglas del juego establecidas.

Por otro lado, la actual recesión que afecta a la economía dominicana y a la economía mundial, ha invertido las prioridades de los síndicos. Del énfasis en los aumentos salariales se está pasando rápidamente a colocar el acento en la estabilidad en el empleo, a asegurar que el flagelo de la cesantía afecte al menor número de trabajadores posible. El movimiento de suspensiones de contratos de trabajo, de desahucios y de despidos es, en estos momentos lo suficientemente significativo, como para que se pueda pensar en aumentos sustanciales de salarios y eso lo saben los sindicatos.

LOS EMPRESARIOS

La eclosión de un poder negociador sindical, aunque disperso en diferentes centrales sindicales y en algunos casos en franca competencia política, ha tenido como contrapartida un fortalecimiento de las entidades empresariales del país.

Durante el gobierno de Balaguer, los grupos empresariales delegaron una cuota apreciable de su capacidad de iniciativa en el poder de decisión del Ejecutivo, en la medida en que éste actuaba como un ente tutelar de los mismos, armonizando fórmulas de consenso y reduciendo las áreas de conflicto interempresarial. La extraordinaria habilidad que se le ha reconocido a Balaguer para resolver los problemas de Estado y lograr fórmulas de transacción entre grupos de intereses en conflicto, junto a la circunstancia del acceso directo a la oficina presidencial de que gozaban los empresarios y de la representación directa al través de la Comisión Nacional de Desarrollo y de los diversos directorios, así como la eficacia lograda por el régimen para minimizar el papel de los sindicatos, hizo innecesario un grado de activismo beligerante mayor de las organizaciones empresariales, como entidades de representación de los intereses de sus asociados, tanto frente al Estado, a los sindicatos y al conjunto de la sociedad.

Bajo el nuevo esquema imperante, anulada la CND y limitado el acceso directo al Ejecutivo - por demás restringido el poder de éste, al asumir el Congreso su rol constitucional plenamente -, al tiempo que umentada la acción sindical y habida cuenta del rol equidistante de la Secretaría de Trabajo, los empresarios han debido fortalecer sus organizaciones sectoriales, por un lado, y por el otro transformar el Consejo Nacional de Hombres de Empresa en una organización cúpula que asuma la representación global del conjunto de la clase empresarial, trazando estrategias coherentes en el nuevo contexto de poder.

Esta nueva situación ha permitido que el sector empresarial exprese de manera pública y sistemática sus posiciones frente a los problemas que afectan a sus integrantes, especialmente en lo concerniente a la política económica, constituyéndose en un grupo de presión activo en el sistema político dominicano.

El desarrollo del sistema de partidos y el fortalecimiento del Congreso, han motivado que el sector empresarial, actuando principalmente a

través del CNHE, haya buscado establecer mecanismos de influencia sobre los partidos políticos electoralmente más importantes, propiciando encuentros con sus líderes y tratando de obtener algunas posiciones de representación congresional para sus miembros, mediante la inclusión de empresarios en las boletas de dichos partidos. Del mismo modo, el CNHE ha establecido diálogos con determinadas centrales sindicales, con vistas a llegar a determinados acuerdos en el plano de las relaciones laborales.

Todos esos esfuerzos, junto a los intercambios y negociaciones efectuados con los responsables de la política económica del gobierno, revelan el interés del sector empresarial por ganar una creciente incidencia en el proceso de toma de decisiones institucional.

A este respecto, la experiencia de la anulada Comisión Nacional de Desarrollo puede ofrecernos algunas referencias útiles acerca del funcionamiento de un foro donde se podían debatir sistemáticamente los principales problemas del desarrollo nacional. Aunque la CND, desde sus inicios tuvo una representación limitada - excluyéndose a los sectores sindicales y a los grupos profesionales - y posteriormente devino en una institución supernumeraria con una elevada cuota de integrantes carentes de representatividad social alguna, mostró en su primera etapa que podía suplir carencias básicas de nuestro esquema de organización institucional.

Agradadamente, en la actualidad existe un organismo - el Consejo Nacional de Desarrollo - que, aunque posee facultades más amplias, hasta el presente sólo ha sido utilizado para un conocimiento ritual del proyecto de ley de presupuesto, antes de su envío por el Ejecutivo al Congreso. Creemos que este organismo puede ser activado como foro democrático de desarrollo, donde los diferentes sectores organizados del país - entre ellos los empresarios - puedan manifestar sus iniciativas y opiniones, al más alto nivel de los poderes públicos.

Una nación aquejada por tan variados y graves problemas, requiere de la existencia de un organismo donde se trabaje de manera regular para aportar soluciones prácticas y viables y se conciten acuerdos entre sus sectores más representativos, a fin de garantizar a dichas soluciones el más amplio y legítimo respaldo.